

Fragilidad fiscal y desarrollo nacional

Adriana Chacón Cascante (*)

La fragilidad fiscal se puede definir como la brecha creciente entre ingresos y gastos del Estado, el consecuente endeudamiento y aumento en el pago de intereses. Ésta la pensamos como una situación ajena a nuestra realidad pese a que la situación fiscal del país tiene efectos en el bienestar de todos los actores nacionales.

Resultados de un trabajo del CINPE y del PNUD muestran dos efectos inmediatos de la fragilidad fiscal. Por un lado, se afectan las variables que determinan nuestro comportamiento como agentes económicos (consumidores y empresarios) poniendo en riesgo la reactivación económica. Por

otro lado, la brecha en los ingresos debilita el apoyo del Estado a la lucha contra de la pobreza y la desigualdad. Preocupa que grupos vulnerables están siendo afectados en mayor grado, al igual que regiones con índices de desarrollo bajos.

Costa Rica se considera un estado social de derecho, que logró altos indicadores de desarrollo humano gracias al gasto social que de manera estratégica se mantuvo por décadas. Hay preocupación de que este gasto continúe disminuyendo, especialmente con la aplicación de la regla fiscal y de compromisos asumidos con organismos internacionales. Si bien se discuten modificaciones a la regla fiscal, existe el riesgo de que ésta limite el crecimiento de los presupuestos de todo el sector público, condicionando la calidad y disponibilidad de

servicios públicos, en sectores donde se debe más bien aumentar la inversión (educación, conectividad, infraestructura vial, seguridad, generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad).

Sobresalen tres retos principales para mejorar la situación: aumentar los ingresos que recauda el Estado, inclinando la balanza hacia impuestos progresivos y directos, minimizando la evasión fiscal; mejorar la eficiencia del gasto, reconociendo que reducciones sin criterios claros no es la solución, se requieren aumentos del gasto público en sectores estratégicos; mejorar la función redistributiva de la política fiscal con enfoque territorial y grupos vulnerables.

Se debe resaltar que el contexto de la fragilidad fiscal se caracteriza por la fragmentación

política, la atomización gremial y sectorial, y un desencanto popular cada vez mayores. Esto impone la necesidad de mejorar la gobernabilidad democrática, de la mano con acciones fiscales que contribuyan a aliviar la pobreza, la inequidad social y el desempleo, fenómenos agravados por la pandemia. Es necesaria una política redistributiva basada en una lógica de desarrollo humano local sostenible, en que la inversión pública potencie las fortalezas de los territorios y atienda sus necesidades particulares. Se deben considerar procesos participativos de construcción colectiva que involucre a actores sociales de los territorios, para diseñar estrategias de política pública con una lógica de abajo hacia arriba, considerando el impacto en grupos vulnerables de jóvenes y mujeres.

(*) Investigadora Cinpe-UNA